

La batalla de las piscinas multiculturales

El aumento de inmigrantes musulmanes convierte el baño de verano en un campo de minas

Hablamos de un conflicto muy serio, aunque algunas manifestaciones parezcan cómicas o anecdóticas. Por ejemplo, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Burgos anunció que iba a intensificar la vigilancia en sus piscinas municipales por el aumento de hombres jóvenes que se bañan con calzoncillos. Se considera que es un hábito antihigiénico y que aumenta el riesgo de rozaduras e infecciones. Por lo visto, es algo que puso de moda el futbolista Lamine Yamal y que copian cada vez más jóvenes, en su inmensa mayoría magrebíes. En Burgos también se ha expulsado de instalaciones municipales a tres mujeres que se bañaron con burkini.

En España resulta complicado conocer el origen de los infractores y agresores sexuales en las piscinas públicas por culpa de la política de comunicación de la Policía. La mayoría de los incidentes que cubre la prensa tienen que ver con el uso no autorizado del burkini. Además de Burgos, se ha expulsado a mujeres musulmanas por usarlo en piscinas de Ripoll. A pesar del peso de la corrección política, sabemos, gracias a las protestas de asociaciones de empleados, que los incidentes violentos se han disparado en los últimos años, pues éstas denuncian la falta de respeto a socorristas y personal de acceso, muchas veces en municipios con alta densidad de inmigrantes.

Las principales reclamaciones se concentran en Bilbao, tras registrarse incidentes en El Fango, Txurdinaga y Rekalde. Los sindicatos solicitan vigilancia de patrullas para disuadir conductas violentas, así como entradas nominativas para prohibir el acceso a reincidentes. Piden la expulsión inmediata tras los altercados y vetos de hasta diez años para reincidentes graves. Se sabe que hay varios agredidos y también trabajadores con cuadros de ansiedad.

El comité de empresa del Ayuntamiento de Madrid ha denunciado públicamente el desamparo que sufren los empleados de las piscinas municipales. La falta de personal de seguridad privada, agravada por problemas administrativos con las empresas adjudicatarias, ha dejado a la plantilla expuesta a amenazas de muerte y agresiones directas. Los representantes sindicales alertan de que esta situación está provocando graves casos de estrés, ansiedad y miedo crónico a la hora de acudir a trabajar.

En Europa sí que se reporta la nacionalidad de los agresores, lo cual clarifica el panorama. El pasado junio, en la localidad alemana de **Schwäbisch Gmünd** (Baden-Württemberg), un inmigrante afgano de 21 años fue detenido por **agredir sexualmente a varias niñas en una piscina pública**. Al menos cuatro menores de entre 12 y 14 años fueron víctimas de tocamientos en nalgas y muslos, intentos de quitarles la parte de abajo del bikini y, en uno de los casos, el agresor intentó introducir un dedo en la vagina de una de las menores, lo que se investiga como tentativa de violación.

Las propias niñas denunciaron el acto, pero, para sorpresa de gran parte de la sociedad alemana, el juez decidió dejar al sujeto en libertad, contra el criterio de la Fiscalía, que solicitaba prisión provisional. La única medida cautelar que impuso el magistrado fue la prohibición de acceder de nuevo a las piscinas. Según datos de la policía, entre el 1 de abril y el 15 de septiembre se registraron **181 delitos en las piscinas de Berlín**, frente a **160 del mismo periodo de 2024. Todo comenzó en 2022**, cuando por primera vez la Federación Alemana de Socorristas llegó a desaconsejar a las familias que acudieran a las piscinas al aire libre los fines de semana por el aumento exponencial de este tipo de delitos.

Según datos del propio Ministerio del Interior alemán, el 64 % de los agresores sexuales en piscinas en 2024 fueron extranjeros, pero en las campañas públicas de concienciación sobre estos problemas los representados siempre son caucásicos para «no estigmatizar» a las minorías. En la región alemana de Hesse, solamente en 2024, se registraron 74 agresiones sexuales en piscinas públicas, con un 60 % de los sospechosos identificados como extranjeros, según medios locales. A nivel federal, en 2023, el 47,5 % de los sospechosos en violaciones en grupo eran extranjeros, y los solicitantes de asilo –pese a representar solo el 2 % de la población– concentraban hasta el 12 % de las denuncias por agresión sexual.

Este verano, una piscina pública del estado de Sajonia-Anhalt prohibió la entrada a cualquiera que no pudiese comprender indicaciones básicas en alemán. Muchos ciudadanos identifican la denuncia de estos incidentes con posiciones de extrema derecha, pero también se ha registrado resistencia por parte de intelectuales de extrema izquierda como el filósofo esloveno Slavoj Žižek. «Constituye un error, tanto teórico como político, condenar este anhelo de comunidad verdadera tildándolo de ‘protofascista’, acusándolo de aspirar a ser una ‘fantasía totalitaria’, es decir, identificando las raíces del fascismo con esas aspiraciones (error en el que suele incurrir la crítica liberal-individualista del fascismo). Ese anhelo debe entenderse desde su naturaleza no-ideológica y utópica», explica en su breve y contundente ensayo *En defensa de la intolerancia* (2008).

Según las estadísticas oficiales de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), los extranjeros representan cerca del 50 % de los sospechosos de delitos cometidos en piscinas y zonas de baño del país. En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, la cifra de implicados no alemanes se eleva notablemente hasta alcanzar aproximadamente el 65 % de un total de 367 sospechosos identificados, los cuales son casi en su totalidad varones. Los extranjeros de origen sirio encabezan la lista estadística oficial. A mediados de 2025, tuvo gran repercusión mediática la investigación a cuatro jóvenes sirios por abusos a un grupo de menores en una piscina de Gelnhausen.

Como consecuencia directa de estos repetidos incidentes de seguridad y de violencia, numerosos recintos públicos y recreativos a lo largo de Europa se han visto obligados a endurecer drásticamente sus normas de acceso. Entre las medidas implementadas de forma generalizada se encuentran la contratación de personal de seguridad privada, la exigencia de mostrar el documento de identidad en la entrada y el control estricto de las normas de convivencia locales. Aunque en menor medida, Suiza y Francia han registrado oleadas de incidentes similares a los de Alemania en los últimos años.